

Imprimir

Difícil ha sido consolidar una negociación incluyente e integral para que Venezuela pueda avanzar en una transición sostenible hacia la democracia. Desde un seguimiento a la situación nutrido por los diálogos que impulsa Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV) con diversos sectores[1], aquí examino varias dinámicas desplegadas por al menos cuatro actores: el régimen que encabeza Nicolás Maduro, los sectores políticos opositores, la sociedad civil y la comunidad internacional.

El régimen de Maduro

Al no controlar la Asamblea Nacional (AN) elegida en diciembre de 2015, Maduro tomó medidas como anular las elecciones en el Amazonas y la representación indígena para que la oposición no tuviera mayoría absoluta, desconocer las decisiones del poder legislativo, neutralizar el control que este debe ejercer sobre el ejecutivo, obligar a muchos diputados a exiliarse, montar una AN paralela y la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya escogencia violó, entre otros, el principio un elector – un voto. Y para aferrarse al poder en las elecciones presidenciales de 2018 impuso todas las irregularidades posibles, por lo que no fue reconocido por más de 60 países.

En las elecciones previstas para diciembre de 2020, el régimen se ha propuesto arrebatarse la AN a la oposición, el único poder que no controla, y sacar a Juan Guaidó. Y ha vuelto a apelar a todo tipo de irregularidades en la recomposición del Tribunal Supremo, con la destitución de la dirección de partidos de oposición, el aumento del número de parlamentarios, los obstáculos en el registro electoral, etc. Por eso, aunque no tiene popularidad ni significativo porcentaje de apoyo, hasta comienzos de octubre Maduro no ha aceptado aplazar esas elecciones desestimando todas las razones: pandemia, petición interna y de la Unión Europea.

Maduro dice irónicamente que no podría redefinir la fecha de las legislativas porque violaría la Constitución, aunque podría verse presionado a hacerlo por problemas del proceso electoral. Pero sin presión interna articulada, los actores políticos y sociales no logran las garantías democráticas exigidas para las legislativas, que repercuten en las regionales-

municipales previstas para 2021 y en las presidenciales. Eso implica al menos diez procesos, que requieren varios meses para revertir las limitaciones impuestas por el régimen: cierre de ANC sin modificación de la Constitución, fin a la inhabilitación de líderes y a la intervención de partidos, selección de nuevos rectores y de un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial, actualización del registro electoral, acceso equitativo a medios de comunicación, anulación de puntos rojos de control político de electores, revisión del sistema automatizado de votación, auditorías totales, real observación internacional pues la volvieron acompañamiento condicionado.

Los partidos opositores

Con las elecciones parlamentarias de 2015 la oposición logró abrumadora mayoría en la AN pero al terminar su periodo no ha logrado unificar vocerías ni hoja de ruta. La fractura opositora no solo es resultado de maniobras del régimen, responde a divisiones ideológicas, disputas de liderazgos, estrategias divergentes.

No ha sido posible conciliar las propuestas ni siquiera de las dos grandes tendencias políticas opositoras. De un lado, está el sector de Guaidó y parte del llamado G4 con su lema cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres; el 1 de octubre, la AN aprobó promover una consulta popular sobre elecciones libres, justas y verificables, y rechazar los comicios del 6 de diciembre; pidió en la ONU aplicar en Venezuela la Responsabilidad de Proteger, y a la OEA, Unión Europea y comunidad internacional continuar respaldando tanto la AN como la presidencia interina de Guaidó y la consulta. De otro lado, está el sector de Henrique Capriles quien dijo “el cortoplacismo y el todo o nada no nos han dejado nada”, se dedicó en septiembre a tratar de ganar espacios o condiciones electorales y negoció la liberación de 110 presos políticos; señaló que no participará el 6 de diciembre por falta de condiciones que hagan creíbles esas elecciones, y pidió posponerlas.

Hay otros tres sectores opositores. El “minimalista” de la Mesa o “mesita” de Diálogo Nacional dispuesta a entenderse con el régimen e ir a elecciones en las condiciones que sea. El “maximalista” de María Corina Machado de Vente Venezuela[2], que rechazó el llamado de

Guaidó a la consulta porque “distrae del objetivo de un cambio de sistema y libertad definitiva” y exige coordinación de fuerzas internas y externas para conformar una coalición internacional con fines humanitarios y liberadores,, una Operación para la Paz y Estabilización de Venezuela, aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar)[3]. Los disidentes del PSUV que tuvieron vocería gubernamental, piden a Maduro suspender las parlamentarias porque no cumplen estándares internacionales de transparencia ni pueden validarse mediante auditorías técnicamente soportables[4].

Así, para las legislativas que Maduro mantiene para el 6 de diciembre, ni los opositores que coinciden en su posición logran articularse. Invitan a votar sin garantías la “mesita”, y aspiran a participar algunos alcaldes y gobernadores electos de la oposición. Tampoco los que se abstendrán tienen estrategia unificada. No se ven incentivos para que los opositores se coordinen, cada vez se desligan más de diversas expresiones sociales y crece el sentir en la población que los políticos no los representan.

La sociedad civil

Los diversos actores sociales, cruciales en la construcción de salidas pacíficas, tampoco actúan articulados, como se ve en los tres sectores que se expresan.

Ante todo, está una creciente protesta, más de 4.000 manifestaciones en el primer semestre de 2020, pese a que el régimen ha tratado de cooptar y controlar las organizaciones populares con redes de vigilancia política y mediante coerción trata de impedir su autonomía, se extienden a pequeños poblados e involucran sectores que apoyaron el chavismo o que dependían de las bolsas de alimentos y de subsidios. Ahora protestan ante el PSUV y sus gobiernos regionales por graves problemas que ocurrían antes pero que los han empeorado las sanciones internacionales y la pandemia, -colapso de servicios de agua, salud, energía, medicamentos, alimentos, desempleo, pobreza, hambre, miseria, desnutrición, mortalidad infantil, desigualdad[5]- generados por la parálisis de la producción petrolera, la prolongada contracción económica, la forma como el régimen enfrenta el creciente déficit fiscal con emisiones de dinero aumentando la inflación que supera 1000%. En un día, el 28 de

septiembre, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró, 76 protestas en 19 Estados del país[6]; del 28 de septiembre al 1 de octubre se contabilizaron 237 protestas en 21 Estados[7].

Además actúan distintos actores sociales. Los sindicalistas petroleros han mostrado que el régimen teme la convulsión social por escasez de gasolina, que ha generado protestas en casi todo el país, y desmintieron anuncios de Maduro que con la puesta en marcha de dos refinerías abastecerá el mercado interno de gasolina[8]. Los maestros protestan porque su salario mensual de menos de 4 dólares no alcanza ni siquiera para cubrir productos básicos de la canasta alimentaria y la labor en medio de la pandemia no cuenta con mínimas garantías. Gremios económicos y comerciales actúan en favor de la apertura de pasos fronterizos formales con Colombia para evitar que los flujos poblacionales y comerciales sigan atrapados por la criminalidad. El sector empresarial es crucial no solo en el impulso de la recuperación macroeconómica sino en el reto de una transición que se replantee el modelo económico y no se centre solo en la explotación petrolera y de recursos como el oro y coltán en el Arco Minero Energético, como lo ha hecho Maduro.

También la sociedad civil se expresa a través de numerosas ONG y plataformas ciudadanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sociales, políticos. Algunas han tratado de realizar un trabajo sistemático de documentación que permita suplir la no entrega por parte del régimen de datos precisos sobre ningún tema, o la manipulación de las cifras sobre indicadores de la crisis humanitaria. Otras han monitoreado el proceso electoral y muchas tienen comunicación internacional. Los informes de ONG, de algunos periodistas y los que producen organismos multilaterales sobre asuntos vitales, son las únicas fuentes de información para que los venezolanos y el mundo puedan calibrar la situación. Aunque han sido estigmatizadas, hostigadas y amenazadas por el régimen, algunas ONG y plataformas se articulan con sectores sociales y han exigido a los opositores que construyan propuestas conjuntas para una salida negociada y una transición democrática en Venezuela.

Lo internacional

La administración Trump impuso sanciones individuales y a empresas que, luego de más de 20 meses de aplicación, han ayudado a empobrecer a la población mientras Maduro sigue anclado en el poder. Luego, desplegó una estrategia en tres pasos: imputó cargos a Maduro por conspiración narcoterrorista y a 14 altos funcionarios, presentó un marco de transición y anunció el envío al Caribe y al Pacífico Oriental de barcos de guerra y aviones de inteligencia antinarcóticos[9]. La reciente gira del secretario de Estado Mike Pompeo a los países limítrofes con Venezuela, mandó un peligroso mensaje, en especial desde Colombia cuyo presidente se ha articulado a Trump y a los opositores venezolanos más radicales. Incidirá lo que pase en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El 6 de septiembre, Maduro invitó como observador electoral a la Unión Europea, que le pidió aplazarlas seis meses. Algunos aliados internacionales al ver lo que pasa con los distintos actores venezolanos, asumen que se aleja la posibilidad de transición y se acerca el fin del período de Guaidó como presidente de la AN -lo que le daba la base constitucional para ser presidente interino de la República-, y con el incierto contexto de la pandemia, pueden irse desentendiendo de esa crisis y concentrar su atención y recursos en lo humanitario para paliar efectos del conflicto más que para buscar un cambio en Venezuela.

Los organismos internacionales juegan un papel crucial, en particular desde Naciones Unidas como lo ha mostrado la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos en Venezuela. El gobierno restringe el acceso y la movilización, a solo dos funcionarios, que trabajan en la oficina de Bachelet en Caracas. Señalar al régimen de Maduro como responsable de la emergencia humanitaria, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad desde 2014, puede tener consecuencias.

En la 75 sesión de la Asamblea de la ONU, Maduro cuestionó esa Misión como “dependiente del Grupo de Lima y de Mike Pompeo”, y trató de desviar la atención llamando a centrar la preocupación en esas “enormes cantidades de dólares que se han otorgado a gobiernos mediante extravagantes conferencias de captación de donantes para los migrantes venezolanos, qué hicieron con ese dinero”. Irán presentó ante el Consejo de Derechos

Humanos de la ONU un reconocimiento de avances alcanzados bajo Maduro que generó 26 abstenciones, 14 votos a favor (incluido el del representante de Maduro) y 7 en contra. Pero eso no le aumentó el respaldo interesado que le dan Rusia, China, Irán, que le sirven a Maduro para resistir en el poder, establecer alianzas externas, evadir sanciones e instrumentalizar discusiones en foros internacionales.

Las grandes potencias y los países aliados podrían ejercer un impacto positivo para abrir posibilidades de transición democrática y sostenible en Venezuela pero la búsqueda de sus intereses los lleva a rechazar o respaldar al régimen de Maduro; sus tensiones pueden atrapar esa crisis en un conflicto internacional.

En suma, la actuación de los actores claves -el régimen, los opositores, la sociedad civil y la comunidad internacional- no parecen estar logrando abrir caminos para una resolución del conflicto en el corto y mediano plazo.

[1] El más reciente, se realizó con académicas que participaron en el estudio del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) *Elementos de una transición integral e incluyente en Venezuela: una visión desde lo loco*; y con organizaciones como Provea.

[2]
<https://efectococuyo.com/politica/para-analistas-retiro-de-capriles-de-la-contienda-electoral-e-s-coherente-pero-insuficiente/>

[3]
<https://www.elnacional.com/venezuela/vente-venezuela-a-guaido-venezuela-no-esta-para-mas-preguntas-sino-para-acciones/>

[4]
<https://www.elnacional.com/venezuela/zulianos-disidentes-del-psuv-piden-a-maduro-suspend-er-las-parlamentarias/>

[5]

<http://encovi-ucab-venezuela-es-el-pais-mas-pobre-de-america-latina-y-el-perfil-nutricional-se-asemeja-a-paises-de-africa.html>

[6]

<https://www.elnacional.com/venezuela/76-protestas-se-registraron-este-lunes-ante-el-colapso-de-los-servicios-publicos-en-el-pais/>

[7]

<https://www.elnacional.com/venezuela/continuan-las-protestas-en-toda-venezuela-ciudadanos-exigen-mejor-calidad-de-vida/>

[8] <https://t.me/eltequenopuntocom>

[9] <https://www.sur.org.co/ofensiva-de-trump/>

Socorro Ramírez

Foto tomada de: The San Diego Union - Tribune